



*Ministerio Público de la Nación*  
*Fiscalía General N°1 ante la Cámara Federal de Casación Penal*

**TÉRMINO DE OFICINA**

Dictamen N° XXX/24.

Excma. Cámara:

Mario A. VILLAR, Fiscal General ante esa Cámara Federal de Casación Penal, a cargo de la Fiscalía n.º 1, en la causa N° FRO XXXX/2014/TO1/CFC2 del registro de la Sala II, caratulada, **“B. P., S. E. Y OTRA POR RECURSO DE CASACIÓN”**, se presenta y dice:

**I**

Viene a esta instancia la presente causa, en virtud del recurso de casación interpuesto por el fiscal contra la resolución que dispuso: *“CONDENAR a Santiago Emanuel BORRAS PERALTA por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, **apartándose de la escala mínima penal prevista en dicha figura, y en consecuencia fijar como pena la de tres (3) años de prisión de ejecución condicional, multa de trescientos pesos (\$ 300) y costas (art. 45 del C.P. y 5 inc. “c” de la Ley 23.737)**”* (el resaltado no es del original).

**II**

Al realizarse el juicio contra S. E. P. B., la fiscalía realizó su acusación solicitando la pena de cuatro años y seis meses de prisión por considerarlo autor del delito de transporte de estupefacientes. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, Provincia de Santa Fe, entendió que el hecho encuadraba en la figura de transporte de estupefaciente y, **apartándose**

**del mínimo de la escala penal del mencionado delito (4 años)**, lo condenó a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional (fs. 359/360 y 364/377).

El Fiscal General dedujo recurso de casación contra aquel pronunciamiento y, alertado de la disposición del artículo 458 del Código Procesal Penal, dio fundados argumentos en pos de la necesidad de franquear la restricción que contiene dicha norma, apoyado en abundante jurisprudencia al respecto y en la existencia de una cuestión federal suficiente, sostuvo que el fallo era arbitrario porque sin motivos perforó el mínimo legal (fs. 380/388). El Tribunal Oral hizo lugar al recurso (fs. 389), y correspondió a la Sala II de esta Cámara Federal de Casación Penal resolver la cuestión, quien dictó la resolución que por vía del recurso extraordinario recurrí, ante su rechazo deduje la queja federal y finalmente la Corte Suprema de la Nación hizo lugar al recurso extraordinario, devolviendo las actuaciones a esta instancia para que se tramite la casación ahora en estudio, y a la que deberá hacerse lugar, según explicaré.

### III

Disconforme con el fallo que perforó el mínimo, como dije, el Ministerio Público Fiscal considera que la resolución cuestionada debe ser descalificada por aplicación de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, habida cuenta que posee una fundamentación meramente aparente que la descalifica como acto jurisdiccional válido.

Por todo esto, refiere que la resolución luce defectos de fundamentación y motivación que la descalifican como acto jurisdiccional válido, constituyendo una sentencia arbitraria (arts. 123 y 456 inc. 2º del



*Ministerio Público de la Nación*  
*Fiscalía General N°1 ante la Cámara Federal de Casación Penal*

C.P.P.N.). En ese sentido, entiende que se ha incurrido en arbitrariedad al interpretar erróneamente las constancias del sumario y también en una omisión valorativa, resultando su fundamentación no sólo aparente, sino también deficitaria, lo cual resiente la lógica del fallo y vulnera el deber legal de motivación previsto en el art. 123 del C.P.P.N.

#### **IV**

Ahora bien, luego de realizar un pormenorizado análisis de las piezas que componen la presente causa y a la luz de las constancias de autos, entiendo que le asiste razón al recurrente con relación a la arbitrariedad de la resolución impugnada.

Cabe recordar que, de conformidad con lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad tiende a resguardar la garantía de defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (CSJN, Fallos: 340:1756 y 320:2326, este último con citas de Fallos: 312:1467 y 317:643). Así, de la lectura de la sentencia impugnada se desprende que el a quo se apartó de la solución normativa del caso, y no fundamentó su decisión. En tal sentido, la resolución no ha sido sustentada en forma razonable, surgiendo nítidamente que, bajo la invocación de arbitrariedad en la argumentación y valoración de los elementos de entidad, no se exteriorizan divergencias de criterio con el razonamiento efectuado por el a quo al momento de decidir en el caso.

En definitiva, un acto jurisdiccional que se haga pasible de la tacha de arbitrariedad, por carecer de fundamento o pretender sustentarse en fundamentos caprichosos o dogmáticos, revela apoyo en la mera voluntad personal de los jueces, vulnera específicos preceptos constitucionales (arts. 1, 18 y 33 CN) y configura un supuesto de nulidad absoluta en los términos de los arts. 166 y concordantes del C.P.P.N.

Nuestro sistema penal debe entenderse dentro de los parámetros de un Estado constitucional y democrático de derecho. En razón del art. 1 de la Constitución Nacional, que establece la forma republicana de gobierno, se exhibe en nuestro paradigma constituyente la idea de división de poderes y la responsabilidad derivada de los actos de gobierno, que por tales deben ser razonados para procurar el debido contralor de las decisiones adoptadas.

Por ello, cabe concluir que los agravios introducidos no encubren la pretensión de tergiversar la valoración de los elementos idóneos para la solución del pleito.

El razonamiento efectuado en la resolución contiene defectos lógicos y revela total arbitrariedad. Es así que los agravios no evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (CSJN, Fallos: 302:284; 304:415, entre otros); a diferencia del recurso Fiscal, el decisorio no cuenta con los fundamentos mínimos, necesarios y suficientes, que hubiesen impedido su descalificación como acto judicial válido (CSJN, Fallos: 293: 294; 299:226; 300:92; entre otros). Por lo demás, el pronunciamiento del *a quo* no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a



**Ministerio Público de la Nación**  
**Fiscalía General N°1 ante la Cámara Federal de Casación Penal**

las constancias de la causa, en consonancia con los parámetros esbozados por nuestra C.S.J.N. (Fallos: 311:984; entre otros).

En esa inteligencia, y en punto a la posibilidad de imponer una pena por debajo del mínimo establecido en la ley, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que *“en virtud de la facultad que le otorga el art. 67, inc. 11º, de la Constitución Nacional, resulta propio del Poder Legislativo declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros e imponer penas (Fallos 11:405; 191:245; 275:89), y asimismo y en consecuencia, aumentar o disminuir la escala penal en los casos en que lo estima pertinente; de tal suerte que el único juicio que corresponde emitir a los tribunales es el referente a la constitucionalidad de las leyes, a fin de discernir si media restricción de los principios consagrados en la Carta Fundamental; sin inmiscuirse en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (Fallos 257:127; 293:163; 300:642; 301:341).”* (Fallos: 314:424 considerando 5).

La Corte ha afirmado que la determinación de las escalas penales es una función del Poder Legislativo, que resulta indelegable al Presidente de la Nación, y que *“la exigencia constitucional de que la conducta y la sanción se encuentren previstas con anterioridad al hecho por una ley en sentido estricto, pone en cabeza exclusiva del poder legiferante la determinación de cuáles son los intereses que deben ser protegidos mediante la amenaza penal del ataque que representan determinadas acciones, y en qué medida debe expresarse esa amenaza para garantizar una protección suficiente. Por ello, una ley que determine qué bienes*

*jurídicos son merecedores de protección contra ciertas conductas que los afectan, pero que correlativamente no establezca cuál es el alcance de la protección que se expresa en la naturaleza y quantum de la pena, no cumple con la exigencia constitucional antes aludida. Ello es así porque sólo quienes están investidos de la facultad de declarar que ciertos intereses constituyen bienes jurídicos y merecen protección penal, son los legitimados para establecer el alcance de esa protección mediante la determinación abstracta de la pena que se ha considerado adecuada*" (Fallos: 312:1920, el resaltado no corresponde al texto original).

Además, en el precedente *Saldaño* (CSJN, S.950.XXIX., rta. el 05/03/1996), la Corte consideró que la sana discreción del legislador en la definición de las escalas penales debía ser respetada, incluso cuando, como resultado de ella, un delito contra la propiedad previera una amenaza de pena mayor que el homicidio porque no sólo se toman en cuenta los bienes jurídicos involucrados, sino también los medios empleados, las características de los autores y otras razones de política criminal. En efecto, la escala de pena prevista para un delito constituye *"la natural y lógica implementación de aquellos medios que el legislador estima adecuados, desde su lícita óptica, dadas particulares e inmediatas circunstancias históricas, para impedir cierto tipo de delitos, protegiendo de ellos a la sociedad y a los individuos que la componen"*, de modo que actuar de otra manera implicaría reemplazar el criterio del legislador por el del juez (dictamen del Procurador en causa *"A., Pedro y otro s/ robo calificado"*, S.C.A.173.L.XXIII).

En este sentido, la doctrina nacional ha dicho que: *"... los mínimos y máximos de las penas, en principio, resultan vinculantes para el juez, salvo*



**Ministerio Público de la Nación**  
**Fiscalía General N°1 ante la Cámara Federal de Casación Penal**

*que se encuentre comprometida su constitucionalidad. Esto podría ocurrir en los casos en que fueran claramente desproporcionados. Al fijar los marcos penales, el legislador actúa según consideraciones preventivas de diferente naturaleza, y su actividad sólo está limitada por las normas constitucionales que le impiden fijar penas crueles...”* (Ziffer, P.; *Lineamientos de la Determinación de la Pena*; Buenos Aires, 1999, p. 40).

Es por ello que, en el ámbito de la determinación de la pena, los magistrados no pueden apartarse de las escalas previstas en la ley, a menos que medie una declaración de inconstitucionalidad. Dejar de lado sin más, como pretende el *a quo*, las prescripciones de la ley, implica efectuar una ponderación que en nuestro sistema se ha dejado librada al criterio del Legislador y configura, por ello, una violación a la forma republicana de gobierno. A su vez, esa declaración debería encontrar fundamentos en que la pena en cuestión es cruel e inhumana, no simplemente desproporcionada desde su perspectiva subjetiva.

Al respecto, sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación que: “... es principio de nuestro ordenamiento constitucional que ningún poder puede arrogarse mayores facultades que las que le han sido conferidas expresamente (Fallos: 137:47, entre otros). La regla según la cual es inválido privar a alguien de lo que la ley no prohíbe, ha sido consagrada en beneficio de los particulares (artículo 19 de la Constitución Nacional), no de los poderes públicos. Éstos, para actuar legítimamente, requieren de una norma de habilitación (Fallos: 32:120, entre otros)...”

*“La soberanía popular es un principio de raigambre constitucional que en el sistema democrático se integra con el reconocimiento del pueblo como último titular del poder político pero, al mismo tiempo, y para cumplir con tal objetivo, pone su acento en los procedimientos habilitados para hacer explícita aquella voluntad, origen del principio de representación. Por ello, el Estado de Derecho y el imperio de la ley son esenciales para el logro de una Nación con instituciones maduras (Fallos: 328:175), y no es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular, pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional...”*

*“... Es por ello que a ninguna autoridad republicana le es dado invocar origen o destino excepcionales para justificar el ejercicio de sus funciones más allá del poder que se le ha conferido, pues “toda disposición o reglamento emanado de cualquier departamento (...) que extralimite las facultades que le confiere la Constitución, o que esté en oposición con alguna de las disposiciones o reglas en ella establecidas, es completamente nulo” (Fallos: 155:290)” (“Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional”, Fallos: 336:760, el subrayado no se encuentra en el original).*

De lo dicho surge que la fijación de los marcos penales realizada por el Legislador solo podrá ser dejada de lado en cuanto sea violatoria de la Constitución Nacional, y en tanto la repugnancia de la norma con la cláusula respectiva sea manifiesta, clara e indudable (cfr. Fallos: 319:178). Al Poder Judicial, una vez realizada la subsunción jurídica, dejando a salvo lo previsto en el art. 44 *in fine* del Código Penal, no se le permite aplicar





**Ministerio Público de la Nación**  
**Fiscalía General N°1 ante la Cámara Federal de Casación Penal**

criterios “*de gracia*”, previstos como atribución exclusiva del Presidente de la Nación (art. 99 inc. 5 C.N.).

El propio Kant señalaba que: “*El derecho de gracia (ius aggratiandi) para el criminal, sea suavizando el castigo sea eximiéndole totalmente de él, es el más equívoco de los derechos del soberano, pues si bien prueba la magnificencia de su grandeza, permite, sin embargo, obrar injustamente en alto grado. (...) Este es el único derecho que merece el nombre de derecho de majestad.*” (KANT, I.; *La Metafísica de las Costumbres*; Madrid, 2005. p. 174).

El perdón o la gracia era una prerrogativa que Kant consideraba que no podía ser ejercida ante delitos que hubieran afectado a otro ciudadano, pues ello implicaría una violación al principio universal del derecho, el cual refleja el derecho de igualdad entre los individuos (KOTKAS, TOOMAS, *Kant on the Right of Pardon A Necessity and Ruler Personal Forgiveness?*, Kant Studien, Walter de Gruyter, col. 102, 2011, p. 418-419).

Este es el fundamento de la cláusula contenida en el art. 99.5 de la Constitución Nacional al establecer que el presidente “*puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal*”, la cual es similar a su fuente, la constitución de los Estados Unidos de América (art. II, § 2.), y cuenta entre sus antecedentes la Carta de Libertades de Enrique I, del año 1100, que estableció un perdón para los homicidas que hayan cometido el delito antes de su coronación (ADAMS AND STEPHENS, *Select documents of English Constitutional History*, Macmillan, Londres, 1930, p. 6).

En un sistema democrático, donde el soberano es el pueblo, es razonable que el *ius aggratiandi*, si tiene algún lugar, esté reservado para los poderes políticos, pues su fundamento es diametralmente distinto del de la pena judicial. Así se ha diseñado nuestro sistema institucional.

En un sentido similar, Silva Sánchez ha dicho que: “... *probablemente ni siquiera el Estado constitucional de Derecho puede prescindir radicalmente, para casos límite, de la institución del derecho de gracia. Ahora bien, su configuración concreta seguramente no debería ser la del indulto tal y como hoy lo conocemos en España. Desde luego, es precisa su regulación por una ley algo más taxativa que la existente, de tal forma que el perdón del soberano no se muestre sino como una variante del “perdón legislativo”. Pero, además, deben construirse dogmáticamente sus presupuestos de fondo y de forma (la motivación), así como someter su ejercicio a un control judicial que excluya la arbitrariedad de su concesión.*” (SILVA SÁNCHEZ, J.M.; *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho penal*; Buenos Aires, 2018, p. 203/204, el subrayado no se encuentra en el original).

La desconfianza al derecho de gracia, por parte de los autores del siglo XVIII, como BECARIA, BENTHAM Y MONTESQUIEU, era debido a su abuso por parte de los gobernantes y porque alteraba la previsibilidad que daban las leyes acerca del castigo de los culpables (KOTKAS, OP. CIT., p. 414).

El separar el castigo de la gracia, no significa *per se* que el Poder Judicial se encuentre sujeto a cualquier norma que emane del Legislador sin evaluar nada más, sino que las leyes dictadas conforme a la Constitución Nacional gozan de una presunción de validez, que supone su razonabilidad;



*Ministerio Público de la Nación*  
*Fiscalía General N°1 ante la Cámara Federal de Casación Penal*

ello obliga a ejercer la declaración de inconstitucionalidad como *ultima ratio* del orden jurídico, es decir, sólo cuando resulten irrazonables porque no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta inequidad (Fallos 263:309; 299:428 y 305:1304, entre otros). Porque, de lo contrario, la capacidad de abuso de esa facultad, propia del poder ejecutivo, pasaría a manos de los jueces que no se encontrarían limitados por las leyes para ejercer su oficio.

En materia de determinación de la pena, la Corte estima que la conminación penal, para que pueda ser aceptada en un Estado de Derecho y sea compatible con la Constitución Nacional, no puede tratarse de “penas crueles o que consistan en mortificaciones mayores que aquellas que su naturaleza impone” y tampoco pueden expresar “una falta de correspondencia tan inconciliable entre el bien jurídico lesionado por el delito y la intensidad o extensión de la privación de bienes jurídicos del delincuente como consecuencia de la comisión de aquél” que resulten repugnantes a la protección de la dignidad de la persona humana (Fallos: 314:424).

Este es el límite que el legislador no puede trasvasar, las penas crueles, inhumanas o degradantes. Pero lo que la Corte no reconoce, como válida, es la facultad del juez para dejar de lado las escalas penales por cuestiones que sirven para evaluar necesidades de prevención especial. En su caso, a lo sumo, puede ser argumentada como atenuante en la determinación de la pena.

Ello resulta coincidente con el criterio expuesto por esta Cámara Federal de Casación Penal en un pronunciamiento, donde se expresó que: *“Dejar a criterio de cada magistrado, el monto de pena que correspondería aplicar en un caso concreto, con prescindencia de la escala seleccionada para el delito por el legislador, sin un fundamento serio que demuestre que dicha sanción pueda derivar en la aplicación de una pena cruel, inhumana o degradante, conforme prohíben el art. 5.2 CADH; art. 7 PIDCyP; art. 2 de la “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”; art. XXVI “Declaración Americana de los Derechos y Deberes Hombre”, sería admitir funciones que caracterizan al ámbito legislativo, y trasladarlas al poder judicial, en violación al sistema republicano de gobierno.”* (C.F.C.P., Sala I, causa FCB 37593/2014/TO1/CFC2, “Jatib, Diego Martín y otros s/ recurso de casación”, reg. 1264/18, rta. 31/10/18).

Es que en materia de determinación de los marcos penales rigen principios que escapan a las atribuciones del Poder Judicial. El Legislador no solo debe establecer la gravedad de un delito en términos absolutos, sino que, en función del principio de proporcionalidad, también debe procurar que la conminación penal de un delito específico sea coherente dentro del sistema penal completo. La modificación judicial de las escalas penales en cada caso concreto conllevaría, pues, la imposibilidad por parte del Legislador de utilizar el diseño de tales marcos como herramienta de política criminal.

Por otra parte, la determinación judicial de la pena se explica como un ámbito en el que inciden tanto argumentos relativos al hecho



*Ministerio Público de la Nación*  
*Fiscalía General N°1 ante la Cámara Federal de Casación Penal*

delictivo, vinculados a las reglas dogmáticas de imputación, como otros influenciados por la teoría de la pena adoptada.

En cuanto a lo primero, Silva Sánchez, para quien tiene un rol preponderante en la teoría de la determinación de la pena la dimensión cuantitativa de un sistema de la teoría del delito, con cita de Frisch señala que *“la búsqueda de la pena ajustada a la culpabilidad (...) no es sino una prosecución de la cualificación del hecho como delito. Depende pues, básicamente, de las categorías del injusto objetivo (de la acción y del resultado), del injusto subjetivo y de la culpabilidad”* (SILVA SÁNCHEZ, J. M.; *La teoría de la determinación de la pena como sistema (dogmático): un primer esbozo*, InDret. Revista para el Análisis del Derecho, 2/2007, p. 8 -[http://www.indret.com/pdf/426\\_es.pdf](http://www.indret.com/pdf/426_es.pdf)).

El acto de determinación judicial de la pena se configura esencialmente como aquél en virtud del cual se constata en concreto el contenido de injusto, culpabilidad y punibilidad de un determinado hecho, traduciéndolo en un determinado *quantum* de pena.

El segundo aspecto que incide decisivamente en la individualización de la pena versa sobre la idea de que su graduación está íntimamente ligada a la extensión del orden de la libertad. En palabras de Pawlik, la determinación de la pena se rige, por una parte, por la medida de la lesión de la libertad acaecida y, por otra parte, por el contexto normativo en el que el autor infringe su deber (PAWLIK, M.; *Ciudadanía y Derecho Penal. Fundamentos de la teoría de la pena del delito en un Estado de Libertades*; España, 2016, P. 59). Si se parte del fundamento del castigo, es posible entender que su

importancia está tanto en su declaración jurídica como en su ejecución, es decir tanto en su función comunicativa como en la aflictiva.

Por otra parte, agrega Magariños que: “... la pena impuesta sólo podrá lograr la estabilización del valor tutelado por la norma cuando ella aparezca como una respuesta posible de ser percibida por la sociedad como racional y proporcional a la acción que quebrantó la norma” (MAGARIÑOS, M.; *Hacia un criterio para la determinación judicial de la pena*; En Roxin, C. et al.; *Determinación Judicial de la Pena*; Buenos Aires, 1993. p. 80.).

El principio de proporcionalidad, que podría utilizarse como un principio rector al momento de graduar o determinar la pena, sólo puede ser relevante en el marco antes reseñado, es decir dentro de la escala penal establecida en la norma como consecuencia del quebrantamiento de la norma primaria.

De tal forma es posible sostener que en el caso se cumple la relación de proporcionalidad entre la pena conminada y la ofensa cometida, vinculada al hecho en sí mismo. Se trata del principio de proporcionalidad que responde a la antigua máxima *poena debet commensurari delicto*, que se remonta a la antigüedad (cf. Ferrajoli, L.; *Derecho y Razón*; Madrid, 2006, P. 397 y ss., con sus notas nro. 150-153).

En este sentido, es importante señalar que el delito imputado es de aquellos por los que el Estado Nacional ha asumido compromisos frente a la comunidad internacional de aplicar “sanciones proporcionadas a la gravedad de esos delitos, tales como la pena de prisión u otras formas de privación de libertad, las sanciones pecuniarias y el decomiso” de



*Ministerio Público de la Nación*  
*Fiscalía General N°1 ante la Cámara Federal de Casación Penal*

conformidad con lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Ley N° 24.072).

Así, tomando en cuenta las particulares circunstancias del caso, la imposición de la pena de 4 años y 6 meses de prisión, solicitada por la fiscalía, no se presenta como un exceso punitivo. Al contrario, resulta adecuada teniendo en consideración las circunstancias personales del acusado y el grado de afectación del bien jurídico comprometido. No hay una manifiesta, clara o indudable desproporcionalidad de esa pena de prisión en función del hecho atribuido y por ello no corresponde apartarse de la escala fijada por el legislador.

Lo expresado en el pronunciamiento se basó en motivos insuficientes para decidir y no conmueve, en modo alguno, lo expuesto en el recurso Fiscal y en el presente dictamen. Así, la recurrente consigue demostrar el vicio jurídico que alega, toda vez que se ha hecho cargo de rebatir adecuadamente los argumentos en los cuales se sustentó la decisión impugnada.

De tal manera, la resolución impugnada omite valorar circunstancias importantes para la resolución del caso y no presenta los fundamentos jurídicos mínimos como para considerarla un acto jurisdiccional válido (art. 123 del CPPN). Por ello, se debe rechazar como acto jurisdiccional válido, por no resultar una derivación razonada del hecho del caso ni del derecho vigente.

A partir de ello, se puede agregar que, en rigor de verdad, el argumento del *a quo* no entraña una fundamentación adecuada para la solución adoptada. Por ende, debe anularse la decisión en recurso.

Y corresponde destacar, que la posición impugnada ha sido correctamente refutada por las razones del recurso Fiscal y las del presente dictamen, sin que el pronunciamiento cuestionado haya logrado, en modo alguno, demostrar su acierto.

#### V.

Por los argumentos expuestos, esta representación entiende que debe hacerse lugar al recurso Fiscal.

Fiscalía N° 1, 15 de agosto de 2024.